

Capítulo 1

«PREOCUPABA LA POSIBILIDAD DE QUE CREÁRAMOS UNA LISTA OFICIAL DE PERSONAS QUE TENÍAMOS QUE LIQUIDAR»

Washington (D.C.), 2001-2002. Eran las diez y diez de la mañana del 11 de junio de 2002, nueve meses después de los atentados del 11 de septiembre. Un grupo de congresistas (senadores y representantes) entró en la sala S-407 del Capitolio federal. Todos ellos eran miembros de un reducido comité de élite en Washington que tenía confiados (por ley) los secretos más celosamente guardados del Gobierno estadounidense en materia de seguridad nacional. «Propongo que esta reunión del comité sea cerrada al público —declaró el republicano Richard Shelby (el más veterano de los dos senadores por Alabama) con su acento sureño característico— porque la seguridad nacional de Estados Unidos podría verse comprometida si se divulgara algo de lo que aquí se comente.» Su moción fue secundada de inmediato y dio así comienzo aquella sesión secreta.¹

Al mismo tiempo que los miembros del Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia y los del comité homónimo permanente de la Cámara de Representantes se reunían en Washington (D.C.), a medio mundo de distancia, en Afganistán, los líderes tribales y políticos del país convocaban una *loya yirga*, un «gran consejo», con la misión de decidir quién dirigiría el país tras el rápido derrocamiento del Gobierno talibán a manos de las fuerzas armadas estadounidenses.² Tras el 11-S, el Congreso norteamericano había concedido a la administración Bush amplios poderes para perseguir a los responsables de los atentados. El Gobierno talibán, que gobernaba en Afganistán desde 1996, fue aplastado por la intervención militar norteamericana, que, de ese modo, privó a al-Qaeda del refugio del que gozaba en suelo afgano. Osama bin Laden y otros líderes de al-Qaeda se dieron a la fuga, pero la administración Bush preveía una guerra larga y esta no había hecho más que empezar.

En la Casa Blanca, el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, andaban ya muy ocupados planificando la siguiente invasión: la de Irak. Cuando accedieron al poder, entre sus planes se encontraba ya el derrocamiento de Saddam Husein y, pese a que no existía conexión iraquí alguna con los atentados, aprovecharon el 11-S

como pretexto para impulsar sus propias prioridades. Pero las decisiones tomadas en aquel primer año de la administración Bush iban mucho más allá de Irak, Afganistán o, incluso, al-Qaeda. Los hombres que estaban al frente del ejecutivo federal en aquel momento estaban empeñados en cambiar la manera en que Estados Unidos libraba sus guerras y, de paso, en dotar a la Casa Blanca de un nivel de competencias sin precedentes. Se habían terminado los tiempos de las batallas contra enemigos uniformados y ejércitos nacionales con arreglo a las normas de las Convenciones de Ginebra. «El mundo es un campo de batalla» se convirtió en un lema reiterado por los conservadores del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos en multitud de diapositivas de PowerPoint en las que exponían sus planes de guerra global general y sin fronteras. Y los terroristas no eran su único objetivo. El sistema democrático de equilibrios y contrapesos entre los diversos poderes, con más de doscientos años de historia, estaba también en el punto de mira de los máximos dirigentes estadounidenses.

La sala S-407 se encuentra enclavada en el ático del edificio del Capitolio. Carece de ventanas y solamente es accesible a través de un ascensor... o de una estrecha escalera. La sala estaba clasificada ya entonces como instalación segura y había sido equipada con sofisticado material de contraespionaje destinado a bloquear cualquier intento de escucha o seguimiento no autorizado desde el exterior. Durante décadas, aquel espacio había albergado sesiones informativas dedicadas a temas de suma confidencialidad, presentadas ante miembros selectos del Congreso por la CIA, el ejército u otras figuras y entidades que habitan en las sombras de la política federal estadounidense. En esa sala se informaba a los congresistas de las acciones encubiertas ordenadas por el ejecutivo. Era una de las diversas instalaciones de este estilo existentes en Estados Unidos donde se comentaban los secretos más celosamente guardados de la nación.³

Los senadores y los representantes que se sentaron en aquella sesión a puerta cerrada de aquella mañana de julio de 2002 en el Capitolio iban a oír el relato de cómo Estados Unidos había cruzado un umbral no traspasado hasta entonces. La finalidad expresa de la reunión era revisar el funcionamiento y la estructura de las organizaciones antiterroristas federales con anterioridad al 11-S. En aquel entonces, había un nivel sustancial de acusaciones y reproches cruzados a propósito de los presuntos «fallos» de los servicios de inteligencia estadounidenses que habían dado pie a que se produjeran los atentados. Inmediatamente después de los que habían sido los golpes terroristas más devastadores en suelo norteamericano de toda la historia, Cheney y Rumsfeld acusaron a la anterior admi-

nistración Clinton de no haber sabido reconocer la urgencia de la amenaza de al-Qaeda y de haber legado a Bush, el nuevo presidente, un territorio estadounidense vulnerable. Los demócratas contraatacaron poniendo el énfasis en su propio historial de lucha contra al-Qaeda en la década de los noventa. Con su comparecencia ante los legisladores estadounidenses en aquella jornada en concreto, Richard Clarke pretendía enviar un mensaje muy claro a la élite del Congreso federal. Clarke había sido el zar del antiterrorismo del presidente Bill Clinton y había presidido el Grupo de Seguridad Antiterrorista del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) durante la década previa al 11-S. También había trabajado en el Consejo de Seguridad Nacional en tiempos del presidente George H. W. Bush y había sido secretario de Estado adjunto en la administración del presidente Ronald Reagan. Era, pues, uno de las autoridades más experimentadas de Estados Unidos en materia de antiterrorismo y, en el momento de la celebración de aquella sesión, estaba a punto de dejar de desempeñar función alguna en el ejecutivo federal, aunque aún ejercía como asesor especial del presidente George W. Bush sobre seguridad en el ciberespacio.⁴ Clarke era considerado un «halcón» que había adquirido prominencia al amparo de la administración demócrata y del que se sabía que había presionado intensamente cuando Clinton era presidente para que se ampliara el volumen y el alcance de las operaciones encubiertas.⁵ Así que era lógico desde el punto de vista táctico que la administración Bush lo hubiera propuesto para defender la instauración de un nuevo régimen de tácticas militares y de inteligencia, una alternativa que, hasta aquel momento, había sido descartada por ilegal, antidemocrática o, sencillamente, peligrosa.

Clarke explicó que los debates internos en la comunidad de organismos federales encargados de la seguridad nacional en tiempos de Clinton habían estado marcados por la preocupación por no infringir la prolongada prohibición presidencial del asesinato como método de actuación gubernamental y por un profundo temor a repetir escándalos del pasado. Clarke dijo estar convencido de que, en la CIA, se había desarrollado «una cultura» que hacía que la Agencia rehuyera las «operaciones encubiertas a gran escala» por considerar que estas siempre «se complicaban y se descontrolaban, y finalmente terminaban por salpicar y enfangar a la propia organización».⁶

«La historia de las operaciones encubiertas durante los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo xx no se puede calificar de afortunada que digamos», confesó Clarke a los legisladores allí reunidos. La CIA había orquestado el derrocamiento de Gobiernos populistas en América Latina y Oriente Próximo, había apoyado a los escuadrones de la muerte de

América Central, había facilitado el asesinato del líder rebelde Patrice Lumumba en el Congo y había ayudado a mantener en el poder a diversas juntas y dictaduras militares. El torrente de asesinatos se había descontrolado hasta tal punto que, en 1976, un presidente republicano, Gerald Ford, creyó necesario decretar la Orden Ejecutiva 11905, que prohibía explícitamente que Estados Unidos cometiera «asesinatos políticos».⁷ Los agentes de la CIA que habían madurado a la sombra de aquella era y habían ascendido a puestos de autoridad en la agencia durante la década de los noventa «habían institucionalizado», según Clarke, la idea de que «las acciones encubiertas son demasiado arriesgadas y tienen muchas probabilidades de explotar en las manos de quienes las ejecutan. Y luego ninguno de los sabelotodos de la Casa Blanca que presionaron en su momento para que se realizaran tales acciones encubiertas va a dar la cara cuando [el Comité del Senado sobre Inteligencia] convoque al jefe operativo de turno para que explique el desastre que dejó tras de sí la acción en cuestión».

El presidente Jimmy Carter introdujo una enmienda en la prohibición de asesinatos que dictara su antecesor para hacerla más general todavía. Eliminó las palabras que limitaban la prohibición a los asesinatos políticos y la hizo extensiva, además, a la participación de actuantes por delegación o contrato del Gobierno estadounidense en toda clase de asesinatos. «Ninguna persona empleada por (o que actúe en nombre de) el Gobierno de Estados Unidos participará (o conspirará para participar) en un asesinato», rezaba la orden ejecutiva del presidente Carter.⁸ Aunque los presidentes Reagan y George H. W. Bush conservaron tal cual la redacción de ese decreto, ninguna orden ejecutiva de ningún presidente llegó a definir en realidad qué se entendía por asesinato conforme a los términos de aquella prohibición. De hecho, Reagan, Bush y Clinton desarrollaron sus propias vías para esquivar la prohibición. Reagan, por ejemplo, autorizó un ataque aéreo contra la residencia del dictador libio Muamar el-Gadafi en 1986 en represalia por su supuesta implicación en un atentado con explosivos contra una discoteca de Berlín.⁹ Bush padre autorizó ataques parecidos contra los palacios de Sadam Husein durante la guerra del Golfo de 1991.¹⁰ Y Clinton hizo lo propio durante la Operación Zorro del Desierto en 1998.¹¹

Clarke refirió a los congresistas detalles sobre los planes que se elaboraron durante la administración Clinton para matar y capturar a líderes de al-Qaeda y de otras organizaciones terroristas, entre ellos, a Osama bin Laden. El presidente Clinton aseguró entonces que la prohibición no era aplicable a casos de terroristas extranjeros implicados en tramas de aten-

tados contra Estados Unidos. A raíz de las explosiones en las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania de finales de 1998, Clinton autorizó una serie de ataques con misiles de crucero contra presuntos campos de entrenamiento de al-Qaeda en Afganistán, así como contra una instalación industrial de Sudán a la que la administración norteamericana atribuyó la función de supuesta planta productora de armas químicas.¹² Posteriormente, se demostró que, en realidad, era una fábrica de medicamentos.¹³ Aunque es cierto que Clinton otorgó esa autorización del uso de la «fuerza letal» a los militares estadounidenses, no lo es menos que fue desde el convencimiento de que esta sería usada solo de manera excepcional y a instancias directas del presidente, tras estudiar caso por caso.¹⁴ Lejos de conceder una carta blanca para la realización de esas operaciones, la Casa Blanca de Clinton exigió un examen exhaustivo de cada propuesta de acción de ese tipo. También estableció una serie de estructuras jurídico-legales. El presidente firmó, por ejemplo, autorizaciones para misiones letales de búsqueda (*lethal findings*) que permitían que los agentes y efectivos del Gobierno estadounidense encargados de la búsqueda y localización de terroristas a lo largo y ancho del planeta se emplearan con niveles mortales de fuerza. Aun así, según Clarke, rara vez llegaron a apretar realmente el gatillo.¹⁵

Clarke admitió que las autorizaciones de asesinatos selectivos emitidas durante la era Clinton «se asemejaban a una serie característicamente talmúdica y un tanto estrambótica de documentos», y añadió que fueron confeccionadas poniendo especial atención en limitar el alcance de esa clase de operaciones. «La administración y, en especial, el Departamento de Justicia no querían invalidar por completo la prohibición del asesinato. De ahí que insistieran en limitar la expansión de esas autorizaciones.» Añadió que aquellas licencias de asesinatos selectivos emitidas durante la era Clinton eran «una especie de tratamientos con un espectro de actuación muy limitado. Pero creo que eso se debía a un empeño en no acabar por completo con la prohibición de los asesinatos, es decir, en no convertir al Gobierno estadounidense en una mafia de matones con una lista de objetivos humanos que había que liquidar».

La representante Nancy Pelosi, uno de los congresistas demócratas más poderosos de aquel entonces, recordó a sus colegas presentes en aquella dependencia a puerta cerrada que no podían comentar en público ninguno de los memorandos ultrasecretos que autorizaban el uso de una fuerza letal. La notificación de aquellos memorandos, dijo ella, «está reservada únicamente al máximo nivel de seguridad en el Congreso. Es un hecho extraordinario [...] que esta información esté siendo compartida

hoy aquí con nosotros». Advirtió que no podía producirse filtración alguna hacia los medios de comunicación y añadió: «En modo alguno podemos confirmar, negar, estipular ni admitir conocimiento de los memorandos». ¹⁶ Alguien preguntó a Clarke si creía que Estados Unidos debía levantar la prohibición del asesinato como método operativo que regía en aquel momento. «Creo que hay que ser muy cuidadosos al respecto de la amplitud con la que se autoriza el uso de la fuerza letal —respondió—. No creo que la experiencia israelí de contar con una dilatada lista de objetivos para eliminar haya sido muy exitosa que digamos. No lo ha sido; desde luego, no han conseguido frenar los actos ni las organizaciones terroristas allí donde han asesinado a personas.» Clarke dijo entonces que, cuando él y sus colegas en la administración Clinton habían emitido autorizaciones para operaciones de asesinato selectivo, estas habían sido para ser aplicadas en casos muy excepcionales y de un carácter netamente quirúrgico. «No queríamos crear un amplio precedente que permitiera que, posteriormente, las autoridades de inteligencia contaran con listas de personas que había que asesinar y que sus efectivos se dedicaran rutinariamente a actividades más o menos próximas al asesinato. [...] Tanto en el Departamento de Justicia como entre ciertos elementos de la Casa Blanca y de la CIA preocupaba la posibilidad de que creáramos una lista oficial de personas que se tenían que liquidar y que se convirtiera a partir de ese momento en algo así como un elemento institucionalizado en el que pudiéramos seguir inscribiendo nombres y para el que contáramos con una especie de equipos de matones dedicados a ir en busca de personas para asesinarlas.»

Aun así, Clarke formaba parte de un reducido grupo de altos funcionarios federales del antiterrorismo estadounidense que, durante la administración Clinton, habían hecho campaña a favor de una mayor agresividad de la CIA en el uso de las mencionadas autorizaciones letales y que habían estirado los límites de la prohibición del asesinato como método hasta las cotas que él mismo estaba describiendo en aquella reunión. «A partir del 11-S —declaró Clarke a los allí presentes—, hemos empezado a hacer casi todo lo que nosotros proponíamos ya antes de esa fecha.»

Pronto empezaría a hacerse eso y más.

Rumsfeld y Cheney habían ocupado los cargos de la nueva administración presidencial con destacados neoconservadores que habían pasado la era Clinton trabajando en lo que, en la práctica, constituía un verdadero Gobierno en la sombra: colaborando en laboratorios de ideas de derecha

y en importantes empresas contratistas del sector de la defensa y los servicios de inteligencia, tramando su regreso al poder. Entre ellos se encontraban Paul Wolfowitz, Douglas Feith, David Addington, Stephen Cambone, Lewis «Scooter» Libby, John Bolton y Elliott Abrams. Muchos de ellos se habían curtido en la Casa Blanca de Reagan y de Bush padre. Algunos —como Cheney y Rumsfeld— provenían ya de la era Nixon. Varios fueron artífices de un programa político nacido al amparo de la organización ultranacionalista Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense (PNAC, según sus siglas en inglés).¹⁷ Pese a las decisiones de Clinton de usar la fuerza en Yugoslavia e Irak y de ordenar ataques aéreos contra otros países, la administración del anterior presidente era para aquellos neoconservadores una fuerza poco menos que pacifista que había debilitado la mano firme del dominio estadounidense y había dejado a la nación en una situación de elevada vulnerabilidad. Creían que los años noventa habían sido una «década de abandono de la defensa».¹⁸ Llevaban tiempo defendiendo que, tras el final de la Guerra Fría, Estados Unidos era la única superpotencia y que, como tal, debía emplearse agresivamente en todo el mundo, redibujando los mapas y expandiendo su imperio. En su proyecto ocupaba un lugar fundamental el incremento radical del gasto militar norteamericano, algo para lo que Cheney y sus asesores ya habían elaborado detallados planes en 1992, cuando aquel era secretario de Defensa. El borrador de Guía de Planificación de la Defensa redactado por el equipo de Cheney proporcionaba —según afirmaban los *neocons* en el documento fundacional del PNAC— «una hoja de ruta idónea para el mantenimiento de la preeminencia estadounidense, pues impedía el ascenso de una gran potencia rival y conformaba un orden de la seguridad internacional en perfecta sintonía con los principios y los intereses norteamericanos».¹⁹ Wolfowitz y Libby fueron los autores clave del programa de defensa de Cheney,²⁰ en el que se defendía que Estados Unidos debía ser la única superpotencia en solitario y debía emprender todas las medidas necesarias para disuadir a sus «competidores potenciales de aspirar siquiera a desempeñar un papel regional o global mayor por su cuenta».²¹

El plan de aquellos hombres fue desechado, sin embargo, por otras figuras más poderosas de la administración del propio Bush padre, como eran el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Colin Powell, el secretario de Estado, James Baker, y el consejero de seguridad nacional, Brent Scowcroft. En el redactado final del documento terminaría rebajándose considerablemente el lenguaje imperialista del borrador inicial (para gran frustración de Cheney y de los neoconservadores).²²

Transcurrida una década desde entonces, antes incluso del 11-S, los neoconservadores (restablecidos en el poder por la administración de Bush hijo) rescataron aquellos planes de la papelera a la que habían sido arrojados en su momento y se propusieron ponerlos en práctica. Para ello, iba a ser esencial expandir la proyección de la fuerza estadounidense, al igual que crear y formar unidades mejoradas de operaciones especiales de élite. Tal y como había declarado George W. Bush en un discurso de campaña en 1999 redactado por Wolfowitz y otros *neocons*: «En el siglo venidero, nuestras fuerzas deberán ser ágiles, letales, fáciles de desplegar y sostenibles con el mínimo apoyo logístico. Debemos tener capacidad para proyectar nuestro poder a muy largas distancias, en unas pocas semanas o días, y no en meses. Por tierra, nuestras fuerzas pesadas deben ser más ligeras. Y nuestras fuerzas ligeras deben ser más letales. Todas ellas deberán ser más fáciles de desplegar».²³

Los neoconservadores también contemplaban como proyecto de futuro la afirmación del dominio estadounidense sobre los recursos naturales a escala global, aunque fuera en confrontación directa con aquellos Estados-nación que se interpusieran en el camino hacia tal propósito. Preveían activamente la posibilidad de cambios de régimen en múltiples países, entre los que destacaba el de Irak por su riqueza petrolífera. «Pese a ser partidarios acérrimos de la intervención militar estadounidense, lo cierto es que pocos *neocons* han servido en realidad en las fuerzas armadas, y aún menor es el número de los que han sido elegidos alguna vez en votación popular para desempeñar un cargo público», escribió Jim Lobe, periodista que había seguido de cerca la ascensión del movimiento neoconservador durante toda una década hasta el 11-S.²⁴ Según él, los *neocons* se caracterizaban por una «incesante ansia de dominio militar global y por el desprecio a las Naciones Unidas y al multilateralismo en general». Lobe añadió: «A juicio de los neoconservadores, Estados Unidos es una fuerza de bien en el mundo; tiene, por lo tanto, la responsabilidad moral de ejercer tal fuerza; su poderío militar debería ser el dominante; debería actuar a escala global, sin que los compromisos multilaterales le impidieran intervenir unilateralmente en pos de sus propios intereses y valores; y debería mantener una alianza estratégica con Israel. Sadam debe marcharse, sostienen ellos, porque es una amenaza para Israel (y también para Arabia Saudí) y porque ha hecho acopio —y uso— de abundantes armas de destrucción masiva». La gente del PNAC había llegado a la conclusión de que «Estados Unidos lleva décadas intentando desempeñar un papel más permanente en la seguridad regional del Golfo. Aunque el conflicto irresuelto con Irak supone la justificación más

inmediata, la necesidad de una presencia sustancial de fuerzas norteamericanas en el Golfo trasciende la cuestión del régimen de Sadam Hussein». ²⁵ A las pocas semanas de asumir sus cargos, Rumsfeld y Cheney presionaron para que se diera marcha atrás en la firma del Estatuto de Roma efectuada por el presidente Clinton (en el ultimísimo momento de su mandato), por la que Estados Unidos reconocía la legitimidad de un tribunal penal internacional. No iban a tolerar que las fuerzas estadounidenses estuvieran sujetas a un potencial procesamiento judicial por sus actuaciones en el resto del mundo. Poco después de convertirse en secretario de Defensa, Rumsfeld escribió que quería que su departamento jurídico —y los de otros organismos del Gobierno federal— hallaran inmediatamente «una vía para salir de ese tratado y para anular la firma de Clinton». ²⁶

Hasta las viejas glorias de la política exterior estadounidense adscritas a las filas republicanas consideraban que los nuevos responsables de la misma eran poco menos que un puñado de extremistas. «Cuando vimos a toda esa gente de vuelta en la capital, todos los que estábamos por allí entonces dijimos: “¡Oh, por Dios, han vuelto los chiflados!”. “Los chiflados”, así nos referíamos a aquellas personas», recordaba Ray McGovern, quien trabajara durante veintisiete años en la CIA y fuera asesor de seguridad nacional de George H. W. Bush cuando este era vicepresidente, tras haber estado a sus órdenes cuando Bush fue director de la Agencia a finales de los años setenta. ²⁷ McGovern dijo que, nada más llegar al poder, los neoconservadores resucitaron ideas que los líderes republicanos veteranos del ámbito de la política exterior habían arrojado a la papelera en anteriores administraciones de presidentes de su partido; también añadió que aquellas ideas extremistas no tardarían en «resurgir de sus cenizas para ser puestas en práctica». Según McGovern, las nuevas autoridades de la política exterior estadounidense creían que «si tenemos mucho poder por desplegar, hay que desplegarlo. Debemos reafirmar nuestra presencia en zonas críticas, como Oriente Próximo y Medio».

Cheney y Rumsfeld llevaban décadas siendo líderes fundamentales de un movimiento muy combativo que, durante años, había sido externo al Gobierno de Washington, pero que, en tiempos de administraciones republicanas, había conseguido actuar desde dentro de la propia Casa Blanca. Su misión consistía en conferir al poder ejecutivo del Gobierno federal poderes sin precedentes para librar guerras secretas, llevar a cabo operaciones encubiertas sin supervisión externa y espiar a los propios ciudadanos estadounidenses. En su opinión, el Congreso no tenía derecho a supervisar tales operaciones y debía limitarse simplemente a financiar las

agencias y los organismos encargados de ejecutarlas. Para ellos, la presidencia tenía que actuar como una especie de dictadura en materia de seguridad nacional que, como tal, solo debía responder ante su propia concepción de lo que era mejor para el país. Ambos hombres trabajaron juntos por primera vez en 1969, en la Casa Blanca de Nixon, cuando Rumsfeld contrató a Cheney (entonces un estudiante de doctorado) como asesor suyo en la Oficina de Oportunidades Económicas.²⁸ Aquello fue el pistoletazo de salida para una carrera que mantendría desde entonces a Cheney en los despachos del poder de la élite republicana y para un proyecto de toda una vida dirigido a incrementar las competencias del ejecutivo federal. El escándalo sacudió repetidamente la Casa Blanca de Nixon en los primeros años setenta, cuando se supo que Estados Unidos había bombardeado en secreto zonas situadas en territorio de Laos y Camboya, que el presidente y sus asesores manejaban una lista de «enemigos» internos (nacionales), y que Nixon había ordenado el tristemente famoso allanamiento de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, ubicada en el hotel Watergate; el Congreso estadounidense comenzó entonces a atacar los privilegios del ejecutivo y el extremo secretismo que se había apoderado de la administración. El legislativo federal condenó los bombardeos de Laos y Camboya²⁹ y superó el intento de veto de Nixon contra la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limitaba las competencias del presidente para autorizar acciones militares.³⁰ En concreto, aquella norma estipulaba la obligación del jefe de Estado de «consultar con el Congreso antes de introducir a las fuerzas armadas de Estados Unidos en hostilidades o en situaciones donde la implicación inmediata en hostilidades sea fácilmente deducible de las circunstancias imperantes».³¹ De no existir una declaración formal de guerra, si se producía una acción militar, el presidente estaba obligado a partir de entonces a informar por escrito al Congreso —en un plazo máximo de 48 horas— de «las circunstancias que hayan hecho recomendable la implicación de las fuerzas armadas estadounidenses, la autoridad constitucional y legislativa por la que se haya autorizado tal implicación, y el alcance y la duración estimada de las hostilidades o de la mencionada implicación». Cheney entendía que la Ley de Poderes de Guerra era inconstitucional, pues suponía una invasión de las atribuciones del presidente en su calidad de comandante en jefe. Llegó a describir aquella época como el momento en que la autoridad presidencial estadounidense «tocó fondo».³²

Después de que el escándalo del Watergate forzara la dimisión de Nixon, Cheney pasó a ejercer como jefe de gabinete del presidente Ford y Rumsfeld se convirtió en el secretario de Defensa más joven de la histo-

ria de Estados Unidos. En 1975, el Congreso redobló sus iniciativas de investigación del submundo de las operaciones secretas de la Casa Blanca gracias a las labores de la Comisión Church, presidida por Frank Church, senador demócrata por Idaho. La comisión investigó una amplia serie de abusos cometidos por el poder ejecutivo en años anteriores, entre los que se incluían operaciones de espionaje en suelo estadounidense contra ciudadanos del propio país.³³ La investigación de la Comisión Church dibujó un panorama de actividades ilegales y secretas llevadas a cabo sin supervisión alguna de los tribunales de justicia ni del Congreso. También indagó en la implicación de Estados Unidos en el derrocamiento y la muerte del presidente democrático de Chile, el socialista Salvador Allende, en 1973,³⁴ si bien, en este caso, Ford invocó su «privilegio ejecutivo» y frustró el escrutinio.³⁵ Durante las pesquisas de la Comisión Church, Cheney trató de forzar la apertura de diligencias del FBI contra el afamado periodista de investigación Seymour Hersh para conseguir una acusación formal contra él y contra el *New York Times* por espionaje en represalia por las revelaciones del propio Hersh a propósito del espionaje ilegal de la CIA en territorio norteamericano a diversos conciudadanos. Pretendía así asustar a otros periodistas para que no se atrevieran a exponer públicamente otras acciones secretas controvertidas de la Casa Blanca.

El FBI rechazó las solicitudes de Cheney relativas a Hersh.³⁶ El resultado final de la investigación de la Comisión fue uno de los peores imaginables para Cheney y para su movimiento de potenciación del poder ejecutivo: sus conclusiones llevaron a la creación de comités del Congreso que tenían encomendada por ley la supervisión de las operaciones de inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, incluidas las de carácter secreto.³⁷ En 1980, el Congreso aprobó una ley que requería a la Casa Blanca informar de todos sus programas de espionaje a esos recién creados comités sobre inteligencia.³⁸ Cheney (y Rumsfeld) pasarían luego buena parte de sus respectivas carreras tratando de dar al traste con esas competencias asumidas por el legislativo federal.

Antes incluso del final de la «progresista» administración de Carter, Cheney había llegado ya a la conclusión de que los poderes de la presidencia habían quedado «gravemente debilitados».³⁹ Durante los años de la administración Reagan, Cheney ejerció de congresista por Wyoming. En la Cámara de Representantes se reveló como un partidario acérrimo de la campaña de Reagan por el «reapoderamiento» de la Casa Blanca. El premio Pulitzer Charlie Savage escribió en su libro *Takeover: The Return of the Imperial Presidency and the Subversion of American Democracy* que el Departamento de Justicia de la era Reagan se propuso poner fin al «resur-

gimimiento del Congreso iniciado en la década de los años setenta» y encargó un informe que recomendaba que la Casa Blanca hiciera caso omiso de las leyes que «invadían inconstitucionalmente el terreno del poder ejecutivo»⁴⁰ y que las reinterpretara recurriendo al mecanismo de los *signing statements*, es decir, los pronunciamientos con los que el presidente puede acompañar su firma de refrendo de una ley aprobada en el Congreso. También le aconsejaba emitir edictos presidenciales que pudieran utilizarse para burlar la supervisión del legislativo. A comienzos de la década de los ochenta, la administración Reagan se había implicado a fondo en apoyar y potenciar a la insurgencia derechista contra el Gobierno izquierdista de los sandinistas en la centroamericana Nicaragua. El elemento central de aquella campaña estaba constituido por el respaldo prestado de forma encubierta por Estados Unidos a los escuadrones de la muerte de la derechista Contra nicaragüense. Reagan también había autorizado el minado de los puertos de Nicaragua, lo que valió a Estados Unidos un fallo condenatorio del Tribunal Internacional de Justicia por uso ilegal de la fuerza.⁴¹

Cuando el Congreso estadounidense decidió finalmente en 1984 prohibir cualquier ayuda estadounidense a la Contra mediante la aprobación de la Enmienda Boland,⁴² algunos miembros de la Casa Blanca de Reagan, encabezados por el coronel Oliver North, que trabajaba en el Consejo de Seguridad Nacional, pusieron en marcha un plan secreto para canalizar fondos hacia los rebeldes derechistas, contraviniendo directamente la ley estadounidense. Los fondos procedían de la venta ilícita de armamento al Gobierno iraní, lo que infringía el embargo en vigor que pesaba sobre cualquier tipo de transacción armamentística con aquel país. Catorce de esos miembros de la administración Reagan (incluido su secretario de Defensa) serían posteriormente condenados por su implicación en aquella trama.⁴³ Cuando se desveló el escándalo Irán-Contra y el Congreso decidió emplearse a fondo investigando sus orígenes, Cheney se destacó como el principal valedor de la Casa Blanca en el Capitolio y emitió una opinión discrepante en defensa de aquel programa estadounidense secreto que la mayoría de sus colegas congresistas habían juzgado ilegal. El «informe de la minoría» —en el que Cheney defendía a la Casa Blanca— tachaba de «histórica» la investigación del Irán-Contra llevada a cabo por el Congreso.⁴⁴ En aquel informe, cargaba contra la mayoría de los legisladores diciendo que la historia dejaba «muy poco lugar a dudas de que es del presidente de quien se ha esperado siempre que tenga el papel principal en el desarrollo de la política exterior de Estados Unidos», y concluía por ello que «las medidas del Congreso dirigidas a limitar el margen de actuación del presidente en ese ámbito deberían revisarse desde una posi-

ción de considerable escepticismo. Si interfieren con las funciones presidenciales centrales en materia de política exterior, deberían derogarse».

El presidente George H. W. Bush indultó posteriormente a los aliados de Cheney condenados en relación con el Irán-Contra. El propio Cheney terminaría siendo secretario de Defensa del ex vicepresidente durante la guerra del Golfo de 1991, cargo desde el que continuó forjando su proyecto de un poder ejecutivo con competencias inigualables en política exterior. Durante su mandato al frente del Departamento de Defensa, Cheney comenzó a sembrar las semillas de otro programa que ayudaría a la consolidación de esa supremacía del poder ejecutivo: encargó a Halliburton, gigante de los servicios de la industria del petróleo, un estudio en el que se exponía un amplio plan de privatización de la máxima cuota posible de la burocracia militar.⁴⁵ Cheney se dio cuenta desde muy pronto de que, empleando a compañías privadas para librar las guerras de Estados Unidos, se crearía una barrera adicional a la supervisión legislativa y judicial, lo que permitiría un mayor secretismo en la planificación y la ejecución de dichas guerras (tanto de las declaradas como de las que no lo estuvieran). Cheney pasaría poco después a presidir Halliburton, puesto en el que permanecería durante la mayor parte de la década de los noventa y desde donde encabezaría una ofensiva para crear un ejército privado en la sombra que, años después, a su regreso a la Casa Blanca a partir de 2001, serviría de eje fundamental de sus guerras (encubiertas o declaradas). Durante la era Clinton, Cheney también estuvo algún tiempo en el neoconservador American Enterprise Institute, donde desarrolló una agenda programática tanto política como militar lista para ser puesta en práctica en cuanto su partido recuperara el poder.⁴⁶ Desde el momento en que George W. Bush fue investido presidente, Cheney pasó a convertirse en el vicepresidente más poderoso de la historia del país. Y no desperdició tiempo en pugnar por expandir aún más ese poder.

El 10 de septiembre de 2001, un día antes de que el vuelo 77 de American Airlines —un Boeing 757— se estrellara contra el muro oeste del Pentágono, Donald Rumsfeld compareció en ese mismo edificio para pronunciar uno de sus primeros grandes discursos como secretario de Defensa. Dos retratos de Rumsfeld colgaban de las paredes interiores de aquellas dependencias: uno de la época en la que fue el secretario de Defensa más joven de la historia estadounidense, y el otro de esta otra nueva época (iniciada ese mismo año) como persona de mayor edad en haber desempeñado nunca ese mismo cargo.⁴⁷ Aún quedaban unas horas

para el 11-S, pero Rumsfeld estaba ya en el estrado ese día para lanzar una declaración de guerra.

«El tema de hoy es un adversario que supone una amenaza, una grave amenaza, para la seguridad de los Estados Unidos de América —bramó Rumsfeld—. Este adversario es uno de los últimos bastiones de la economía de planificación central que aún quedan en el mundo. Gobierna mediante la promulgación de planes quinquenales. Desde una única capital, trata de imponer sus exigencias a lo largo y ancho de varios husos horarios, continentes, océanos y más allá. Con una sistematicidad brutal, ahoga el libre pensamiento y aplasta las ideas nuevas. Es una fuente de problemas para la defensa de Estados Unidos y pone en riesgo la vida de nuestros hombres y mujeres de uniforme.»⁴⁸ Rumsfeld —todo un veterano de la Guerra Fría— prosiguió ante los que eran sus nuevos subordinados: «Quizás este adversario nos recuerde mucho a la antigua Unión Soviética, pero aquella era un enemigo que ya ha desaparecido: nuestro antagonista de hogaño es más sutil e implacable. Tal vez piensen que estoy describiendo a alguno de los últimos dictadores decrepitos que quedan en el mundo, pero también su tiempo ha pasado ya prácticamente y en ningún caso pueden equipararse en fuerza y magnitud a las de este otro adversario. El contrincante del que les hablo es mucho más cercano a nosotros. Me refiero a la burocracia del Pentágono». Lo que estaba en juego, declaró, era muy serio, «una cuestión de vida o muerte, en último término, para todos los americanos». Rumsfeld explicó a su público de aquel día, formado por ex ejecutivos de la industria de la defensa convertidos recientemente en burócratas del Pentágono, que tenía la intención de hacer más eficiente la manera en que Estados Unidos libraba sus guerras. «Habrá quien se pregunte que cómo se atreve el mismísimo secretario de Defensa a atacar al Pentágono ante su propia gente —dijo Rumsfeld a su auditorio—. A esas personas les respondo que no tengo deseo alguno de atacar al Pentágono; lo que quiero es liberarlo. Tenemos que salvarlo de sí mismo.» Aquel nuevo enfoque sería bautizado por Rumsfeld y su equipo como su particular «revolución de los asuntos militares».⁴⁹

El equipo de estrellas que Bush había formado para que se encargara de su política exterior llegó al poder con un programa dirigido a reorganizar radicalmente las fuerzas armadas estadounidenses, a poner fin a lo que ellos entendían que había sido el debilitamiento de las defensas nacionales durante la era Clinton y a reactivar el despliegue de sistemas colosales de defensa antimisiles que ya habían apoyado Reagan y otros halcones de la Guerra Fría.⁵⁰ Douglas Feith, adjunto de Rumsfeld en aquel entonces, recordaría tiempo después que «la amenaza del terrorismo yihadista esta-

ba en la lista de preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos al comienzo de la administración Bush, a principios de 2001, pero recibía menos atención que Rusia».⁵¹ El foco central de la preocupación por el «terrorismo» de aquellos primeros meses de la administración de Bush hijo se dirigía sobre todo hacia las amenazas planteadas por determinados Estados-nación (Irán, Siria, Corea del Norte e Irak) y hacia la posibilidad de propiciar en ellos un cambio de régimen. Cheney y Rumsfeld habían dedicado buena parte de la década de los noventa a trazar una ruta para recomponer los mapas de Oriente Próximo y Medio, pero aquella proyección no estaba en absoluto centrada en la amenaza asimétrica que planteaban al-Qaeda y otras organizaciones terroristas. Irak (y no al-Qaeda) era su obsesión. «Desde el primer momento, nos dedicamos a reunir y exponer razones para justificar el derrocamiento de Husein y a estudiar cómo echarlo del poder para transformar Irak en un país nuevo —dijo en una ocasión el ex secretario del Tesoro Paul O'Neill—. Y sabíamos que si conseguíamos expulsarlo de allí, habríamos dado con la solución integral del problema. De lo que se trataba, pues, era de hallar el modo de hacerlo. Eso era lo que marcaba el tono de nuestros trabajos por entonces. El presidente nos decía: “Perfecto. Busquen cómo conseguirlo”.»⁵² En la segunda reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la nueva administración presidencial, la celebrada el 1 de febrero de 2001, Rumsfeld se expresó sin rodeos: «En lo que queremos pensar de verdad es en cómo ir a por Sadam».

Lo irónico del caso —teniendo en cuenta las bravatas de Rumsfeld a propósito de la debilidad mostrada durante la era Clinton, y las acusaciones de los neoconservadores contra los demócratas a quienes recriminaban haber bajado la guardia ante al-Qaeda— es que, al principio, el propio Rumsfeld restaba importancia a la inminencia de la amenaza representada por la organización terrorista antes del 11-S. El periodista Bob Woodward relató los detalles de una reunión supuestamente celebrada el 10 de julio de 2001, dos meses antes de los atentados del 11 de septiembre. El director de la CIA, George J. Tenet, se reunió con Cofer Black, jefe del Centro de Antiterrorismo de la CIA (el CTC), en Langley (Virginia). Ambos hombres repasaron la información de inteligencia disponible sobre Bin Laden y al-Qaeda. Black, según Woodward, «expuso su argumento al respecto, basándose en diversas comunicaciones interceptadas y en otros datos de inteligencia de alto secreto que mostraban la probabilidad creciente de que al-Qaeda atentara en breve en territorio estadounidense. Sus pruebas eran un amasijo de fragmentos y puntos sin conectar que, pese a todo, parecían apoyar seriamente esa conjetura, tan seriamen-

te que Tenet decidió que Black y él debían acudir a la Casa Blanca de inmediato».⁵³ En aquel entonces, «Tenet llevaba algún tiempo teniendo dificultades para conseguir que se emprendiera un plan de acción inmediata a propósito de Bin Laden, en parte, porque el secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld, había cuestionado todos los datos de grabaciones de conversaciones obtenidos por la Agencia de Seguridad Nacional y por otras fuentes de inteligencia que le habían presentado al respecto. ¿Acaso todo aquello no podía tratarse de un engaño a gran escala?, se había preguntado Rumsfeld. Tal vez fuera simplemente un plan destinado a medir las reacciones y las defensas estadounidenses». Tras revisar la información de inteligencia con Black, Tenet llamó a la consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, desde su coche camino de la Casa Blanca. Cuando Black y Tenet se reunieron con Rice ese mismo día, según Woodward, tuvieron «la sensación de que no estaban convenciendo a la consejera. Ella se mostró amable con ellos, pero tuvieron la impresión de que les estaba dando calabazas». Black diría más tarde que «lo intentamos todo, menos apretar el gatillo de la pistola con la que le estábamos apuntando a la cabeza».

Poco después, los aviones pilotados por los secuestradores del 11-S se estrellaban contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Rumsfeld y su equipo no tardaron mucho tiempo en comprender que la lucha contra el terrorismo no tenía por qué perjudicar sus planes a propósito de Irak, sino que, de hecho, podía servir de justificación para ponerlos en marcha. Pero lo que quizá fue más importante entonces es que aquellos momentos posteriores al 11 de septiembre permitieron que Rumsfeld, Cheney y sus adláteres hicieran realidad sus tan ansiadas aspiraciones de un poder ejecutivo omnipotente que gozara del derecho virtualmente ilimitado de librar guerras allende cualquier frontera, un derecho para el que ellos hallaban justificación en una hipotética amenaza global a la seguridad nacional. Los objetivos y los planes de los que tanto habían hablado sin alzar mucho la voz en diversos encuentros no oficiales no tardarían en convertirse en la política oficial de Estados Unidos.

Desde el momento en que el comité de guerra del presidente Bush comenzó a planificar una respuesta a los atentados del 11-S, Rumsfeld encabezó la ofensiva dirigida a incluir a Irak en la lista de objetivos inmediatos. De cara a las reuniones que Bush convocó para el fin de semana del 15 y el 16 de septiembre de 2001 en Camp David, Feith preparó un memorando para Rumsfeld en el que se enumeraban «los blancos prioritarios inmediatos de una acción inicial»: al-Qaeda, los talibanes e Irak.⁵⁴ «Las prioridades estaban muy claras desde la misma noche del 11-S», me

explicó el general Hugh Shelton, presidente en aquel entonces de la Junta de Jefes de Estado Mayor y asesor militar de mayor rango del presidente Bush.⁵⁵ Según me comentó, Rumsfeld y Wolfowitz empezaron a presionar de inmediato para que se organizara un ataque contra Irak. «Tenemos que invadir Irak. Tenemos que hacerlo ya —recordaba que dijeron—. Y eso a pesar de que no existía la más mínima prueba que indicara que [el 11-S] tenía vinculación alguna con Irak. Pero, aun así, el sonido de tambores comenzó aquella misma noche. No les gustó que entre los planes [de respuesta al 11-S] con los que me presenté en el despacho en aquel momento no hubiera ninguno que contemplara los planes que ellos manejaban para Irak.» Richard Clarke declaró por su parte que, el 12 de septiembre, el presidente Bush le ordenó tres veces que buscara hasta «el más mínimo indicio» que conectara a Irak con los atentados.⁵⁶ Wolfowitz envió un memorando estratégico a Rumsfeld en el que argumentaba que «bastaría con un 10 % de probabilidades de que Sadam Husein estuviera detrás del ataque del 11-S» para que «la eliminación de esa amenaza debiera convertirse en la máxima prioridad».⁵⁷ Junto a Shelton en el bando de las opiniones contrarias a la invasión de Irak, estaba uno de sus antecesores en el cargo, el general Colin Powell, a la sazón secretario de Estado. Una década antes, durante la guerra del Golfo, Powell ya había chocado frontalmente con Wolfowitz (en aquel entonces, subsecretario de Defensa) y con las ideologizadas autoridades civiles del Pentágono por el deseo que estas tenían de que las tropas estadounidenses llegaran hasta Bagdad para derrocar a Sadam.⁵⁸ Pero Powell y otros conservadores tradicionales como el ex secretario de Estado James Baker y Brent Scowcroft se impusieron en aquel debate. Diez años después, sin embargo, con los atentados del 11-S muy presentes en la mente de todo el mundo, Wolfowitz y los ideólogos estaban convencidos de que podrían alcanzar sus objetivos.

Según Shelton, en Camp David, Wolfowitz continuó presionando para que se ordenara un ataque contra Irak, a pesar de que el propio Shelton, Powell y figuras destacadas de las agencias de inteligencia insistían una y otra vez en que no había prueba alguna que indicara que Irak tuviese algo que ver con los atentados. Cuando los debates se centraron en Afganistán y en cómo atacar los refugios de al-Qaeda en aquel país, «como cabía esperar, Wolfowitz sacó el tema a colación: “Tenemos que utilizar esto como un motivo para atacar a Irak”», recordaba Shelton. El doctor Emile Nakhleh, analista de alto nivel de la CIA en aquel entonces, también se había dedicado a informar al presidente durante el periodo inmediatamente posterior al 11-S. Nakhleh llevaba una década en la Agencia, durante buena parte de la cual se había movido por diversos países musul-

manes de todo el mundo bajo la excusa oficial del desempeño de su actividad académica. Tras haber puesto en marcha el Programa de Análisis Estratégico del Islam Político de la CIA, del que había sido académico residente y especializado en movimientos islamistas radicales y en Gobiernos de Oriente Próximo y Medio, Nakhleh era el equivalente en la Agencia de un general de tres estrellas en el ejército estadounidense. Según me explicó él mismo, ante las presiones de Rumsfeld y Wolfowitz en aquellas primeras reuniones y ante la insistencia de estos en que se incluyera una invasión de Irak entre las primeras reacciones a los atentados, Nakhleh se levantó y les dijo: «Si quieren ir a por ese hijo de perra [Sadam] para arreglar todas sus cuentas pendientes con él, adelante, pero nosotros no tenemos información alguna de que Sadam estuviera vinculado con al-Qaeda o con el terrorismo, y tampoco disponemos de información mínimamente clara» sobre la cuestión de las armas de destrucción masiva (ADM).⁵⁹ Nakhleh comentó que, tras aquellas primeras reuniones posteriores al 11-S, su «conclusión y la de otros analistas fue que iban a ir a la guerra. Aquel tren había salido ya de la estación y daba igual la información de inteligencia que nosotros presentáramos». El presidente Bush aparcó el debate sobre Irak durante un tiempo, pues en su campaña electoral se había comprometido a no intervenir en operaciones de «construcción nacional». Entre otras cosas, había dicho que quería una política exterior «humilde». ⁶⁰ Pero sus opiniones al respecto evolucionaron con rapidez.

Llevó algún tiempo —y más de una docena de visitas a la CIA de Cheney y de su jefe de gabinete, «Scooter» Libby—⁶¹ acumular suficientes «pruebas» de la existencia de un programa iraquí activo de ADM para que los halcones *neoon* se salieran con la suya y pusieran en marcha sus planes de invasión de Irak. Pero, entretanto, se pusieron manos a la obra con su particular guerra contra la supervisión externa y la rendición de cuentas exigidas hasta entonces al ejecutivo federal. Al principio, la campaña de la CIA y las fuerzas especiales en Afganistán fue un paseo triunfal. Y, mientras la guerra en Afganistán daba pie a espectaculares titulares de prensa ensalzando la rapidez y la contundencia de la campaña militar estadounidense contra el débil Gobierno talibán, Cheney, Rumsfeld y sus seguidores neoconservadores andaban ocupados tramando una guerra global, una guerra que terminaría extendiéndose también al frente nacional interno de EE.UU., con escuchas telefónicas sin autorización judicial previa, detenciones en masa de árabes, paquistaníes y otros inmigrantes musulmanes, y una ingente reducción de los derechos civiles de los propios ciudadanos estadounidenses.⁶² Para librarla, tendrían que desmantelar y manipular la maquinaria administrativa dedicada a la supervisión y

a la revisión judicial y legal que se había ido configurando a lo largo de sucesivas administraciones presidenciales previas. Todo esto abriría las puertas a un conjunto de prácticas que ya se habían usado con anterioridad, pero que, a partir de ese momento, pudieron desplegarse a una escala sin precedentes: acciones encubiertas, operaciones «negras», prisiones secretas, «secuestros» de prisioneros y la aceptación más o menos velada del asesinato como táctica bajo la etiqueta de la eliminación de «objetivos de alto valor».

Con el precedente aún cercano de la era Reagan-Bush, durante la que la institución de las operaciones encubiertas había quedado seriamente tocada por el escándalo Irán-Contra, el presidente Clinton implantó durante su primer mandato más mecanismos de supervisión y creó un riguroso sistema legal para la aprobación de acciones encubiertas «letales». Cuando Clinton o su consejero de seguridad nacional proponían una operación encubierta de esa clase, esta tenía que superar un sistema de supervisión interna:⁶³ en primer lugar, se remitía a la CIA, donde el jefe de los servicios jurídicos de la Agencia estudiaba su legalidad antes de trasladarla (posiblemente, junto con alguna que otra propuesta de cambio, resultado de ese estudio de legalidad) para una revisión adicional a dos comités distintos dentro de la propia CIA: el Grupo de Planificación de Acciones Encubiertas y el Grupo Examinador de Acciones Encubiertas. Cuando ambos comités habían revisado la propuesta de actuación y habían sugerido modificaciones en la misma, esta regresaba a la mesa del jefe de los servicios jurídicos de la Agencia para que procediera a su estudio de legalidad definitivo y, seguidamente, remitiera los resultados al presidente o al Consejo de Seguridad Nacional. Una vez de vuelta en la Casa Blanca, la propuesta era sometida a la evaluación del Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Acciones Encubiertas, formado por representantes de diversos organismos y agencias del poder ejecutivo. Este grupo analizaba las consecuencias potenciales de la acción propuesta y la sometían a un nuevo estudio de legalidad. Tras un examen final a cargo de los máximos responsables (y de sus adjuntos) de las agencias y organismos pertinentes, la acción era presentada ya definitivamente al presidente para que este le diera su aprobación. Rara era la vez en que llegaba a aprobarse una operación de este tipo.

Cuando el presidente Bush juró el cargo a comienzos de 2001, su administración dio a entender que pretendía conservar muchos de esos mismos controles y contrapesos. El sistema previsto en la Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional n.º 1 (NSPD-1), firmada por Bush el 13 de febrero de 2001, seguía muy de cerca el vigente durante la era Clinton para

la aprobación de acciones encubiertas.⁶⁴ Pero en marzo, Bush pidió a su consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, que solicitara de la CIA «el diseño de una nueva serie de autorizaciones de acciones encubiertas en Afganistán».⁶⁵ Clarke y sus homólogos de la CIA, encargados del funcionamiento de la llamada «Unidad Bin Laden», comenzaron a planificar acciones encubiertas con al-Qaeda como objetivo, mientras la administración estadounidense proponía aumentar los fondos destinados a anti-terrorismo en la CIA. Clarke presionó a fondo para que la Casa Blanca ordenara un ataque de represalia contra al-Qaeda por el atentado con explosivos de octubre de 2000 contra el destructor USS Cole en las costas de Yemen.⁶⁶ Como ya era costumbre en tiempos de Clinton, muchos de los planes que se elaboraron por entonces contemplaban atacar a líderes de al-Qaeda afincados en Afganistán. A finales de mayo, Rice y Tenet se reunieron con Clarke, Cofer Black y el jefe de la Unidad Bin Laden para discutir la posibilidad de «pasar a la ofensiva» contra al-Qaeda.⁶⁷ La CIA estaba llevando a cabo en aquel entonces labores de interferencia en la capacidad operativa de Bin Laden, pero las autoridades allí reunidas estuvieron de acuerdo en que lo que necesitaban era un plan para «doblegar» a al-Qaeda. También coincidieron en la necesidad de prestar ayuda encubierta a Uzbekistán, aunque se abstuvieron de ofrecer apoyo significativo a la Alianza del Norte y a otros grupos antitalibanes del interior de Afganistán.⁶⁸ Por así decirlo, optaron por dar continuidad al enfoque ya adoptado durante la era Clinton con respecto a al-Qaeda y Afganistán, aunque incrementando el presupuesto y el ámbito geográfico de actuación.

En junio se difundió un proyecto de nueva Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional (NSPD) en materia de antiterrorismo. El consejero adjunto de seguridad nacional, Stephen Hadley, describiría posteriormente aquel programa ante la Comisión de Investigación del 11-S como «decididamente ambicioso», pues en él se proponía una iniciativa de varios años en la que intervenían «todos los instrumentos del poder nacional» y que incluía un ambicioso programa de acciones encubiertas.⁶⁹ Pero el proyecto aún tendría que superar otras cinco reuniones entre directivos adjuntos de esas agencias y organismos antes de que se sometiera a la valoración final de los máximos responsables de las mismas.⁷⁰ En una de esas reuniones, celebrada en agosto de 2001, el Comité de Directivos Adjuntos del CSN había llegado a la «conclusión de que es legal que la CIA mate a Bin Laden o a uno de sus segundos» con un ataque con un *drone* (avión no tripulado) Predator.⁷¹

Aunque el uso de *drones* terminaría por convertirse en una de las señas características de la maquinaria estadounidense de asesinatos selec-

tivos, con anterioridad al 11-S había grandes discrepancias sobre la cuestión en las filas del equipo de responsables y asesores de antiterrorismo de Bush. Durante el año final de la administración Clinton, Estados Unidos había empezado a realizar vuelos con aviones no tripulados sobre territorio de Afganistán⁷² que despegaban desde una base estadounidense secreta, llamada K₂, en Uzbekistán.⁷³ También se había puesto en marcha un programa para la creación de un *drone* equipado como arma y utilizable como tal, pero el prototipo no estaba aún operativo.⁷⁴ Cofer Black sostenía incluso que los *drones* no debían ser usados siquiera para labores de reconocimiento, con lo que daba a entender que la administración debería esperar hasta que fueran desplegados como elemento armamentístico.⁷⁵ Señalaba como justificación que el Gobierno talibán había detectado un Predator sobre territorio afgano en 2000 y que lo único que había conseguido Estados Unidos con ello era que Kabul ordenara el despegue de cazas MiG para interceptarlo. «No creo que el posible valor de reconocimiento de esos aparatos sea superior al riesgo de una posible finalización forzada del programa como la que se produciría si los talibanes exhibieran un Predator carbonizado ante las cámaras de la CNN», afirmó Black al respecto.⁷⁶ Al final, la administración decidió aparcarse el uso de *drones* para misiones de reconocimiento en Afganistán hasta que pudieran ser cargados con armamento para ser utilizados en operaciones de ataque.⁷⁷ Pero mientras Black, Clarke y otras figuras del equipo de asesores en antiterrorismo del presidente insistían con denuedo en el aprovechamiento posterior de los Predator para la realización de operaciones de asesinato selectivo, los máximos dirigentes de la CIA se mostraban seriamente preocupados ante la posibilidad de que la Agencia fuese la encargada finalmente de poner en práctica ese programa, una preocupación que recordaba en gran medida a la que sentían los asesores en antiterrorismo de Clinton ante el riesgo de crear listas estadounidenses de potenciales objetivos humanos. Según la Comisión del 11-S, Tenet «en particular cuestionó si él, como director de la Agencia Central de Inteligencia, debía ser quien se encargara de organizar una operación con un Predator armado. “Ese era un territorio nuevo”, nos dijo. Tenet apuntó diversas preguntas clave al respecto: ¿cuál es la cadena de mando? ¿Quién dispara? ¿Van a sentirse cómodos los dirigentes estadounidenses con que la CIA haga algo así, saliéndose de los cauces normales de mando y control militar?». ⁷⁸ Charles Allen, director adjunto de recopilación de datos de inteligencia de la CIA entre 1998 y 2005,⁷⁹ dijo que él y el número tres de la Agencia, A. B. «Buzzy» Krongard, «habían asegurado en su momento que cualquiera de ellos estaría encantado de apretar el gatillo, pero que

Tenet estaba horrorizado», y añadió que ningún miembro del personal de la CIA contaba con suficiente autoridad para utilizar *drones* para la ejecución sumaria de personas, aunque se tratara de terroristas.⁸⁰

Estos debates se desarrollaban en el seno mismo de la Agencia y no fue hasta una semana antes del 11-S cuando la administración Bush convocó un encuentro de «directivos principales» de organismos y agencias para analizar y comentar la amenaza de al-Qaeda. En esa reunión del 4 de septiembre, se presentó oficialmente el proyecto de la nueva Directiva Presidencial sobre Seguridad Nacional, que fue aprobado «sin apenas discusión» y remitido a Bush para que lo firmara.⁸¹ Al parecer, la consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, explicó entonces al presidente Bush que, a su juicio, se tardarían unos tres años en implementar tan ambicioso programa.⁸² El 10 de septiembre, Hadley continuó presionando al director Tenet y a la CIA para que elaborara un proyecto de atribución de competencias legales «para el desempeño del “amplio programa de acciones encubiertas” previsto en el proyecto de directiva presidencial». ⁸³ Hadley también le dio instrucciones para que redactara unas conclusiones para dicha directiva en las que «se autorizara una amplia variedad de otras actividades encubiertas, que incluían los apresamientos extrajudiciales o el uso de la fuerza letal [contra] los elementos de mando y control» de al-Qaeda. Según el informe final de la Comisión del 11-S, ese apartado final anularía varios de los documentos aprobados durante la era Clinton y debería ser suficientemente amplio como para «dar cobertura a cualquier operación adicional que pudiera contemplarse en relación» con Osama bin Laden. Aunque la administración Bush trabajaba en la ampliación del ámbito de aplicación de la fuerza letal aceptable contra Bin Laden y sus principales lugartenientes, el proceso había venido marcado por las mismas preocupaciones expresadas durante la era Clinton con respecto a la concesión de una capacidad legal demasiado amplia de aplicación de esa fuerza letal. La Casa Blanca de Bush estaba tomando inicialmente, pues, una vía muy similar a la de la administración Clinton, consistente, por un lado, en tratar de soslayar la prohibición del asesinato como método aplicable por el Gobierno de Estados Unidos y, al mismo tiempo, en seguir requiriendo una cuidadosa revisión y estudio de cualquier propuesta de operación letal de ese tipo.

Todo eso cambiaría el 11 de septiembre.

Con el derrumbe de las torres del World Trade Center, también se desplomó el sistema de supervisión y examen de las operaciones letales encubiertas que tan minuciosamente se había ido construyendo en el transcurso de la década anterior.

«Solo una crisis —real o percibida como tal— produce un verdadero cambio.»⁸⁴ Eso escribió el icono conservador Milton Friedman en su libro *Capitalismo y libertad*. Friedman fue un asesor clave de diversas administraciones republicanas sucesivas y su influencia sobre muchos de los altos cargos de aquella Casa Blanca de Bush era enorme. Había sido mentor de Rumsfeld en los inicios de su carrera en la administración federal,⁸⁵ y tanto Cheney como los principales *neocons* del ejecutivo le pedían consejo con regularidad.⁸⁶ Friedman había predicado que, «cuando sucede una crisis así, las medidas que se emprenden dependen de las ideas sembradas y cultivadas hasta ese momento. Y esa, creo yo, es nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, y mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en políticamente inevitable».⁸⁷

Para los principales altos cargos de los equipos de seguridad nacional y defensa de Bush, que habían dedicado los ocho años de la presidencia de Clinton (y más) a desarrollar tales alternativas, los atentados del 11-S y el apoyo casi unánime que les concedió en aquellos momentos el Congreso (pese a ser de mayoría demócrata) supusieron una oportunidad de oro para convertir sus ideas en inevitables. Los neoconservadores del Proyecto para el Nuevo Siglo Estadounidense habían hecho ya, un año antes del 11-S, una estremecedora predicción de lo que estaba por venir en su informe «Rebuilding America's Defenses» («La reconstrucción de las defensas de Estados Unidos»), cuando escribieron que, «aun cuando traiga consigo un cambio revolucionario, el proceso de transformación será probablemente prolongado salvo que se produzca algún suceso catastrófico que actúe como catalizador, al estilo de un nuevo Pearl Harbor».⁸⁸ Puede que ni Cheney ni Rumsfeld supiesen prever el 11-S, pero en lo que demostraron ser unos maestros fue en el aprovechamiento de aquellos atentados. «El ataque del 11-S fue uno de esos acontecimientos de la historia con la suficiente potencia como para estimular ideas frescas y sacudir a las mentes dormidas —según Feith—. Brindó la oportunidad de que muchas personas (amigas y enemigas, en Estados Unidos y en el extranjero) adquirieran una nueva perspectiva. Rumsfeld, Wolfowitz y yo éramos de la opinión de que el presidente tenía el deber de hacer uso de su privilegiada posición de poder.»⁸⁹

Según la Constitución, es el Congreso (y no el presidente) el que tiene el derecho de declarar la guerra. Pero 72 horas después del 11-S, el legislativo federal dio un paso radical en la dirección contraria. El 14 de septiembre de 2001, la Cámara de Representantes y el Senado otorgaron al presidente Bush una libertad sin precedentes para librar una guerra glo-

bal con la aprobación de la llamada Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, según sus iniciales en inglés). En ella se indicaba que «el presidente queda autorizado para utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que considere que hayan planificado, autorizado, cometido o amparado los atentados terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001, o que hayan dado acogida a tales organizaciones o personas, con la finalidad de impedir cualquier acto futuro de terrorismo internacional de tales naciones, organizaciones o personas contra Estados Unidos».⁹⁰ La inclusión del término *personas* en dicha autorización fue tomado por la administración como una señal de luz verde para los asesinatos selectivos. El documento se aprobó en la Cámara con un único voto en contra, y en el Senado, sin oposición alguna.⁹¹ El único «no» a la AUMF vino de la demócrata progresista californiana Barbara Lee: «Por difícil que pueda resultar un voto como este [en estos momentos], algunos de nosotros debemos instar a la moderación —declaró Lee, con la voz temblorosa al subir al estrado de la Cámara de Representantes ese día—. Tiene que haber unos cuantos de nosotros que digamos: “parémonos un momento a pensar en las implicaciones de lo que estamos haciendo hoy; tratemos de reflexionar más a fondo sobre sus consecuencias”», añadió en los comentarios que remitió aquella jornada.⁹² «Debemos procurar no embarcarnos en una guerra de contornos y términos indefinidos, sin una estrategia de salida ni un objetivo concreto y delimitado.»⁹³ El discurso de dos minutos de Lee fue toda la resistencia que opuso el Congreso a los amplísimos poderes bélicos que la Casa Blanca le solicitó.

Facultada por el respaldo aplastante de ambos partidos para librar una guerra global (sin fronteras) contra un enemigo sin Estado, la administración Bush convirtió el mundo en un campo de batalla. «Tendremos que trabajar desde el lado oscuro, por así llamarlo —proclamó Dick Cheney en el programa *Meet the Press* de la cadena NBC el 16 de septiembre 2001, insinuando lo que estaba por venir—. En el mundo de la inteligencia, tendremos que pasar un tiempo inmersos en las sombras. Si queremos conocer mucho de lo que necesitamos saber, tendremos que averiguarlo sin hacer ruido, sin levantar polémicas, usando las fuentes y las técnicas al alcance de nuestros servicios de inteligencia.»⁹⁴ El presidente firmó públicamente la AUMF el 18 de septiembre de 2001, convirtiéndola así en ley, pero aún sería más trascendente la orden que había firmado en secreto el día anterior. Esa directiva presidencial secreta, que continúa estando clasificada a día de hoy, otorgó a la CIA la autoridad para apresar y retener en cualquier lugar del mundo a cualquier sospechoso de ser un activista o

combatiente radical. Esto se tradujo en breve en la creación de una red de lo que altos cargos de la administración llamaban en círculos internos «sitios negros», que podían ser usados para recluir e interrogar a prisioneros.⁹⁵ La directiva también eliminó de un plumazo los posibles obstáculos de supervisiones y exámenes interdepartamentales del proceso de autorización de asesinatos selectivos. Pero la que tal vez fue su medida más significativa fue la anulación del requisito de que el presidente autorizara con su firma toda operación letal encubierta. Los abogados de la administración Bush llegaron a la conclusión de que la prohibición de los asesinatos no regía para personas que la Casa Blanca clasificara como «terroristas», y el presidente dotó de gran libertad a la CIA para que autorizara operaciones de eliminación de personas sobre la marcha. En ese primer momento, pues, Bush quería que la Agencia tomara las riendas. Y conocía al hombre perfecto para ese trabajo.

Cofer Black había pasado gran parte de su carrera profesional actuando entre bambalinas en África. Se había curtido como agente de la CIA en Zambia durante la guerra de Rodesia y, posteriormente, en Somalia y Sudáfrica durante la brutal guerra del régimen del *apartheid* contra la mayoría negra del país.⁹⁶ Durante sus años en Zaire, Black trabajó en el programa encubierto de armamentos de la administración Reagan para equipar a las fuerzas anticomunistas de Angola.⁹⁷ A comienzos de la década de los noventa, mucho antes que la mayoría de sus colegas en la comunidad del antiterrorismo estadounidense, Black se obsesionó con Bin Laden y dijo de él que era una importante amenaza que había que neutralizar. Entre 1993 y 1995, Black trabajó bajo cobertura diplomática en la embajada de Estados Unidos en Jartum (Sudán), donde ejerció como jefe de la delegación de la CIA.⁹⁸ Bin Laden se encontraba también en Sudán en aquel entonces, afianzando su red internacional y transformándola en lo que la CIA describiría poco después, al término del período de servicio de Black en aquel país, como «la Fundación Ford del terrorismo islámico suní».⁹⁹ Los agentes de Black, que se ocupaban de seguir los pasos de Bin Laden, trabajaban por entonces dentro del marco de una «directiva operativa» de la era Clinton que limitaba sus actividades a la recopilación de información de inteligencia sobre Bin Laden y su red.¹⁰⁰ Black quería disponer de la autoridad necesaria para matar al multimillonario saudí, pero la Casa Blanca de Clinton no había firmado todavía las llamadas «conclusiones letales» (*lethal findings*) que permitían el uso de la fuerza letal (conclusiones que sí firmaría tras los atentados de 1998 contra las

embajadas estadounidenses en el África oriental).¹⁰¹ «Desgraciadamente, en aquella época, los permisos para matar —conocidos oficialmente como conclusiones letales— eran un tema tabú en el equipo —declararía algún tiempo después el agente de la CIA Billy Waugh, estrecho colaborador de Black en Sudán—. A principios de los años noventa, estábamos obligados a ceñirnos a la mojigatería de los servicios jurídicos y de los apóstoles de las buenas obras.»¹⁰² Entre las ideas de Waugh rechazadas en aquel momento, se encontraba al parecer todo un plan para matar a Bin Laden en Jartum y arrojar su cadáver ante la embajada iraní con la intención de atribuir la culpa a Teherán, una idea que, según Waugh, «encantó» a Cofer Black.¹⁰³

En los primeros momentos de la administración Bush, Black comenzó a hacer campaña de nuevo para que le concedieran la autorización necesaria para ir a por Bin Laden. «Solía pasarse por mi despacho y amenizarme con sus explicaciones sobre las muchas veces que, antes del 11-S, había intentado hacer algo al respecto de Bin Laden», recordaba años después Lawrence Wilkerson, quien había ejercido de jefe de gabinete del secretario de Estado Colin Powell durante aquella época.¹⁰⁴ Wilkerson me contó que Black le había dicho que «nunca había podido hacer nada por culpa de la falta de valentía de la [Fuerza] Delta y de la insuficiente competencia administrativa de la CIA». Black le explicó, al parecer, que «cada vez que presentaban una posibilidad a la Delta para que sus fuerzas de operaciones especiales actuaran, esta siempre le venía con una lista de preguntas sobre detalles que los de la CIA tenían que responder antes de considerar intervención alguna, como, por ejemplo, “¿qué clase de clavos hay en la puerta?”, “¿qué tipo de cerradura hay en ella?”, “¿cuál es el número de serie de la cerradura?” y otras nimiedades por el estilo, que son el método convencional de disuasión que utilizan las SOF [Fuerzas de Operaciones Especiales] cuando no quieren hacer algo». Para gran alegría de Black, el Gobierno estadounidense no tardaría en prescindir por completo de tan meticulosas prácticas.

El 6 de agosto de 2001, el presidente Bush se hallaba en su rancho de Crawford (Texas)¹⁰⁵ cuando recibió el Informe Diario al Presidente titulado «Bin Laden decidido a atacar en Estados Unidos».¹⁰⁶ En él se mencionaba dos veces la posibilidad de que activistas de al-Qaeda intentaran secuestrar aviones, citando información del FBI que daba «a entender la existencia de unos patrones de actividad sospechosa en [Estados Unidos] que concuerda con la preparación de secuestros o de otros tipos de atentado, y que incluiría la vigilancia reciente de edificios federales en Nueva York». Nueve días después, Black habló ante una conferencia secreta del

Pentágono sobre antiterrorismo. «Vamos a ser atacados pronto —dijo Black ese día—. Muchos estadounidenses van a morir y podría ser en el propio Estados Unidos.»¹⁰⁷

Después del 11-S, Bush y Cheney reescribieron las reglas del juego. Black ya no tuvo que ponerle a nadie una pistola en la cabeza para obtener autorización para llevar a cabo operaciones letales. «Mi sentimiento personal de aquel momento fue que aquello había empezado oficialmente por fin —recordaría luego el propio Black—. Digamos que era una sensación análoga a la del perro que lleva mucho tiempo encadenado en un depósito de chatarra y al que están a punto de soltar: no veía la hora de que me desataran.»¹⁰⁸ En su primer encuentro con el presidente Bush tras los atentados del 11-S, Black esbozó cómo se desplegarían los paramilitares de la CIA en Afganistán para dar caza a Bin Laden y a sus esbirros. «Cuando hayamos terminado con ellos, los ojos les bullirán de moscas», prometió, entregado a una sentida actuación (la de aquel día) que, dentro el círculo de máximos allegados al presidente, le valdría el apelativo de «el de las moscas en los ojos».¹⁰⁹ Al parecer, el estilo de Black impresionó muy favorablemente al presidente. Cuando le comentó a Bush que la operación no sería incruenta, el presidente le dijo: «Vamos a por ello. Así es la guerra. Hemos venido a ganar».¹¹⁰ Philip Giraldi, un agente de carrera de la CIA que se formó originalmente en La Granja (las instalaciones de adiestramiento de la CIA ubicadas en una zona rural de Virginia) con Black, recordaba haberse encontrado con él en Afganistán poco después de que los primeros equipos estadounidenses hubieran llegado allí tras el 11-S. «Llevaba muchos años sin verlo —me dijo Giraldi—. Me asombró lo cerrada que se había vuelto su mentalidad. Básicamente, no dejaba de decir que iban a traer la cabeza de Bin Laden de vuelta a Estados Unidos en una bandeja... ¡literalmente!»¹¹¹ Giraldi dijo que Black «tenía una visión estrecha de las cosas» y que detestaba a los aliados europeos más próximos a Estados Unidos, británicos incluidos, de quienes decía «no fiarse ni un pelo». En lo referente a la guerra global emergente de Estados Unidos, Giraldi me comentó que Black era «todo un entusiasta de la misma, algo muy poco habitual en la Agencia. En la CIA, la gente tiende a mostrarse escéptica ante algo así. Si eres un agente de los servicios de inteligencia desplegado sobre el terreno, te vuelves escéptico ante muchas cosas muy pronto. Pero Cofer era uno de esos raros entusiastas».

El 19 de septiembre, se desplegó el equipo de la CIA conocido con el nombre en clave Jawbreaker («Rompemandíbulas»). Black dio a sus hombres unas instrucciones tan directas como macabras. «Caballeros, quiero darles las órdenes de su misión y quiero que estén muy claras. He

comentado esto con el presidente y él está totalmente de acuerdo», explicó Black al agente secreto de la CIA Gary Schroen y a su equipo.¹¹² «No quiero que apresen a Bin Laden y a sus matones; los quiero muertos —exigió Black—. Deben ser asesinados. Quiero ver fotos de sus cabezas clavadas en picas. Quiero que la cabeza de Bin Laden sea enviada de vuelta en una caja rellena de hielo seco. Quiero poder enseñar la cabeza de Bin Laden al presidente. Le prometí que así lo haría.» Schroen dijo que aquella había sido la primera vez en sus treinta años de carrera que se le había ordenado asesinar a un adversario sin que su captura fuese el objetivo prioritario. Black preguntó si se había expresado con claridad. «Con absoluta claridad, Cofer —le respondió Schroen—. No sé dónde encontraremos hielo seco por allí, en Afganistán, pero estoy convencido de que sabremos fabricar unas picas allá mismo, sobre el terreno.» Black explicaría más tarde por qué consideraba necesario todo aquello: «Íbamos a necesitar ADN. Y hay un modo excelente de conseguirlo. Se toma un machete y se le secciona la cabeza de un tajo. Y ya está, de ahí sale un cubo entero de ADN que se puede obtener y analizar. ¡Mucho mejor que transportar el cuerpo entero!». ¹¹³ Cuando un grupo de diplomáticos rusos reunidos con Black en Moscú antes de la invasión estadounidense oficial de Afganistán recordaron a Black la derrota soviética contra los muyahidines (apoyados por EE.UU.), Black replicó exaltado: «Nosotros vamos a matarlos —dijo—, vamos a clavar sus cabezas en estacas. Vamos a convulsionar su mundo». ¹¹⁴ En las operaciones encubiertas organizadas por Black inmediatamente después del 11-S, este recurrió en gran medida a guardias de empresas privadas de servicios militares, contratadas por el Gobierno estadounidense, todo un síntoma de lo que vendría no mucho tiempo después. El equipo inicial de la CIA consistía en unos sesenta ex miembros de la Fuerza Delta, de los SEAL y de otros grupos de fuerzas de operaciones especiales, que trabajaban para Black en calidad de empleados de contratistas independientes y que constituían la mayoría de los primeros estadounidenses que intervinieron en Afganistán tras el 11-S. ¹¹⁵

Al principio, la lista de objetivos preautorizados de los asesinatos selectivos de la CIA era reducida: se calcula que su número estaba entre las siete y las dos docenas de personas, incluidos Bin Laden y su segundo en al-Qaeda, Aiman al-Zawahiri. ¹¹⁶ Y las operaciones estaban centradas principalmente en Afganistán. El 7 de octubre, el presidente Bush lanzó oficialmente la llamada «Operación Libertad Duradera» y las fuerzas armadas estadounidenses iniciaron una campaña de ofensivas aéreas, seguidas de una invasión por tierra. ¹¹⁷ Durante los primeros días de la campaña

en Afganistán, los personales de la CIA y de las fuerzas especiales trabajaron coordinados. «Estamos luchando por cumplir con los objetivos AT [antiterroristas] en el teatro de operaciones afgano —escribió el jefe de operaciones especiales antiterroristas en un memorando dirigido al personal de la CIA en octubre de 2001—. Y aunque esto signifique tratar de fijar unos objetivos elevados en un terreno muy incierto y movedizo, también estamos luchando por el futuro de la guerra antiterrorista integrada de la CIA y el Departamento de Defensa en todo el mundo. Aunque cometeremos errores a medida que vayamos reconociendo este nuevo territorio y vayamos aplicando una nueva metodología, nuestros objetivos están claros y nuestro concepto de colaboración es sólido.»¹¹⁸ En aquel entonces, la CIA tenía una capacidad paramilitar muy limitada, pero como principal agencia responsable de la caza de los responsables del 11-S, siempre podía pedir prestados los servicios de las fuerzas de operaciones especiales para sus misiones.¹¹⁹

Sin embargo, Rumsfeld no tenía interés alguno en ser el equipo de apoyo de la CIA. La centralidad emergente de la Agencia en la incipiente guerra global de Estados Unidos incomodaba al secretario de Defensa. Rumsfeld no sentía más que desprecio por la administración Clinton y tanto él como Cheney y sus aliados neoconservadores pensaban que la CIA había terminado por convertirse en una versión izquierdista rebajada de sí misma. La capacidad operativa encubierta, creían ellos, había sido maniatada por la acción combinada de los juristas y de la innecesaria y molesta supervisión del Congreso, que no habían hecho más que dificultar unas operaciones que, para ellos, eran de vida o muerte y tenían que ser llevadas a cabo en secreto. No bastaba con que Cofer Black compartiera el afán de Rumsfeld por matar a «terroristas». Rumsfeld no quería relación alguna con los burócratas supervisores de la CIA y tampoco estaba dispuesto a que sus fuerzas estuvieran bajo el control de la Agencia. Cheney, por su parte, había dejado muy claro que, bajo la nueva administración, ni los abogados de la CIA ni las comisiones del Congreso serían tenidos por elementos de defensa de la ley ni por parte integral de un sistema necesario de controles y contrapesos. Como Rumsfeld era aficionado a decir, todas esas instituciones eran un estorbo para «llevar el combate hasta el campo propio de los terroristas». Los abogados solo serían requeridos a partir de ese momento para que dieran su aprobación automática a políticas que serían de elaboración y aplicación secretas, y sobre las que solamente se consultaría a unos pocos miembros selectos del Congreso. Y los informes remitidos al Congreso —incluidos los legalmente obligados (en teoría, sin restricciones de acceso) para la élite de congre-

sistas conocida como la «Banda de los Ocho», a quienes históricamente se había mantenido informados de las operaciones de inteligencia relacionadas con acciones encubiertas— serían censurados y redactados internamente a partir de ese momento en la propia Casa Blanca, lo que significaba que los legisladores estadounidenses recibirían una versión aséptica de los mismos.

En los meses posteriores al 11-S, Cheney, Rumsfeld y sus equipos lanzaron varias iniciativas de gran nivel dirigidas a conseguir que ningún elemento burocrático se interpusiera en sus planes para la libre utilización de las más oscuras fuerzas estadounidenses. Cheney quería desengañar a la CIA y dejarle claro que no disponía de ningún tipo de independencia. La Agencia iba a dejar de actuar como principal recurso de comprobación de los hechos y de suministro de información de inteligencia del presidente para convertirse en un mero instrumento de refuerzo de una política predeterminada de antemano. Cheney pretendía excluir todas las propuestas de operaciones letales del proceso de estudio interdepartamental que era práctica estándar durante la era Clinton. Así, poco después del 11-S, la Casa Blanca convocó a un grupo de abogados de alto nivel de la administración federal con el encargo de que justificaran legalmente la tortura, el secuestro y el asesinato. El grupo, autodenominado en secreto el «Consejo de Guerra»,¹²⁰ estaba dirigido por David Addington, asesor jurídico de Cheney y consejero suyo durante años, pues, entre otras cosas, había colaborado con él en la confección del «informe de la minoría» en defensa de las operaciones del Irán-Contra.¹²¹ En aquel equipo jurídico también se encontraban Alberto Gonzales, abogado en jefe de la Casa Blanca, y su segundo, Tim Flanigan; el abogado general del Pentágono, William Haynes, y el vicesfiscal general adjunto, John Yoo.¹²² Del susodicho Consejo de Guerra fueron explícitamente excluidos el abogado general del Departamento de Estado y otros letrados militares y del Departamento de Justicia a quienes sí se había incluido históricamente en las estructuras de examen jurídico-legal relacionadas con el combate antiterrorista.¹²³ Una cosa estaba clara: aquel grupo tenía encomendada la elaboración de una justificación legal de las tácticas que se emplearían en una guerra sucia encubierta, no la evaluación independiente de la legalidad de las mismas.

Para librar su guerra global, la Casa Blanca recurrió extensamente a las tácticas que tanto tiempo llevaba proponiendo Cheney. Uno de los elementos centrales de su campaña desde el «lado oscuro» sería el uso de las «conclusiones» presidenciales, algo que, por su propia naturaleza, limitaría enormemente toda labor supervisora realmente efectiva desde el

Congreso. Con arreglo a la Ley de Seguridad Nacional de 1947, el presidente tiene la obligación de emitir una «conclusión» antes de emprender una operación encubierta. La ley estipula que esta operación tiene que ser conforme con la legislación y la Constitución estadounidenses.¹²⁴ La conclusión presidencial firmada por Bush el 17 de septiembre de 2001 fue utilizada para crear un programa altamente secreto y clasificado conocido con el nombre en clave de Greystone.¹²⁵ GST (abreviatura que lo designaba en los documentos internos de la administración) sería un paraguas bajo el que se autorizarían muchas de las actividades más clandestinas y legalmente cuestionables, y bajo el que estas se llevarían a cabo durante los primeros tiempos de la llamada «guerra global contra el terrorismo» (GGCT). Se fundamentaba sobre la interpretación que la administración Bush hizo de la AUMF aprobada por el Congreso, que declaraba a toda persona sospechosa de pertenecer a al-Qaeda un blanco legítimo en cualquier parte del mundo.¹²⁶ La conclusión presidencial antes mencionada declaró preautorizadas en la práctica (y legales) todas las acciones encubiertas, algo que, según las voces críticas al respecto, vulneraba el espíritu mismo de la Ley de Seguridad Nacional. Al amparo de GST, se crearon diversos programas compartimentados que, sumados, formaban en realidad una misma operación de asesinato y secuestro global.¹²⁷ El proceso de autorización de asesinatos selectivos se simplificó radicalmente. Tales operaciones dejaron de requerir de aprobación presidencial directa caso por caso. Black, director del Centro de Antiterrorismo, podía ordenar directamente ataques a partir de ese momento.¹²⁸

En el mismo día en que Bush firmó el memorando de notificación —que, entre otras iniciativas, autorizaba un programa de Detenidos de Alto Valor—, se celebró una sesión informativa para el personal del CTC y para «homólogos extranjeros seleccionados» en Washington (D.C.). «Cofer [Black] presentó una nueva autorización presidencial que ampliaba nuestra opciones para tratar con sospechosos de terrorismo, una de las pocas ocasiones en que algo así había pasado desde que en 1976 se prohibiera oficialmente a la CIA cometer asesinatos —recordaba hace unos años Tyler Drumheller, ex jefe de operaciones clandestinas de la CIA en Europa—. Estaba claro que la administración entendía aquello como una guerra que tendría que ser librada principalmente por los efectivos de inteligencia. Eso exigía una nueva manera de operar.»¹²⁹ John Rizzo, veterano abogado de la CIA que ayudó a redactar la autorización, diría más tarde: «Yo jamás había participado o, siquiera, visto una autorización presidencial de tan largo alcance y de un enfoque tan agresivo como el de aquella. Era sencillamente extraordinaria».¹³⁰

GST sirvió también de vehículo para diversas operaciones de raptos de prisioneros, conocidas como «entregas extraordinarias». Al amparo de GST, la CIA comenzó a coordinarse con agencias de inteligencia de varios países para instituir acuerdos de «estatus de fuerzas» destinados a la creación de prisiones secretas donde pudiera retenerse e interrogar a los detenidos, manteniéndolos fuera del alcance de la Cruz Roja, el Congreso estadounidense o cualquier mínimo atisbo de sistema judicial.¹³¹ Dichos acuerdos no solo conferían inmunidad al personal del Gobierno estadounidense, sino también al que estaba a sueldo de empresas contratistas privadas.¹³² La administración no quería llevar a juicio a los sospechosos de terrorismo, «porque se protegerían tras sus abogados —según José Rodríguez, máximo encargado por entonces de la Dirección General de Operaciones de la CIA y, como tal, responsable de toda la “acción” organizada por la Agencia—. Nuestra labor consiste, ante todo, en obtener información».¹³³ Para conseguirla, se autorizó a que los interrogadores emplearan técnicas macabras —medievales incluso— con los detenidos, muchas de las cuales se habían desarrollado tras estudiar las tácticas de tortura de los enemigos de Estados Unidos. Los abogados del Consejo de Guerra emitieron una serie de documentos jurídicos, bautizados posteriormente por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las libertades civiles con el nombre de «memorandos de las torturas», con los que pretendían justificar aquellas tácticas como elementos necesarios que no eran propiamente constitutivos de tortura.¹³⁴ «Necesitábamos que todos los responsables de nuestro Gobierno actuaran como adultos y proporcionaran a las autoridades lo que precisábamos para nuestro cometido —recordaría posteriormente Rodríguez, quien, junto con Black, terminaría por convertirse en uno de los arquitectos fundamentales de la política de torturas—. Había tenido muchas experiencias en la Agencia con situaciones en las que nos habían cargado a nosotros el muerto. Y yo no iba a permitir que les sucediera lo mismo a las personas que trabajaban para mí.»¹³⁵

La CIA comenzó a retener en secreto a prisioneros en Afganistán —concretamente, en unas dependencias ubicadas en los confines de la base aérea de Bagram— aprehendidos inicialmente por fuerzas militares estadounidenses. Al principio, se trató de una operación puntual en la que los prisioneros se mantenían hacinados en contenedores de transporte. Pero, al final, se amplió a unos cuantos emplazamientos más, entre ellos una prisión subterránea próxima al aeropuerto de Kabul y una vieja factoría de ladrillos al norte de la capital afgana.¹³⁶ Esta última instalación, que hacía también las veces de subdelegación de la CIA, acabaría siendo

conocida como el «Pozo de la Sal» y sería utilizada para alojar a prisioneros diversos, incluidos los raptados en otros países y traídos acto seguido hasta Afganistán.¹³⁷ Las autoridades de la CIA que trabajaban en labores de antiterrorismo en aquellos primeros tiempos posteriores al 11-S declararían después que la idea de la creación de una red de prisiones secretas repartidas por todo el mundo no fue un plan diseñado inicialmente a gran escala, sino que fue evolucionando a medida que creció el alcance de las operaciones.¹³⁸ La CIA había explorado en un primer momento la posibilidad de usar buques e islas remotas —como los islotes deshabitados dispersos por el lago Kariba, en Zambia— como posibles instalaciones de detención en las que interrogar a sospechosos de actuar para al-Qaeda.¹³⁹ Al final, sin embargo, la CIA creó su propia red de «sitios negros» en, al menos, ocho países, entre ellos, Tailandia, Polonia, Rumanía, Mauritania, Lituania y Diego García (en el océano Índico). Pero al principio, y puesto que carecía de prisiones secretas propias, la Agencia comenzó a derivar a sospechosos hacia Egipto, Marruecos y Jordania para que fueran interrogados allí.¹⁴⁰ Recurrir a esos servicios de inteligencia extranjeros tenía la «ventaja» de que los prisioneros podían ser torturados a discreción, sin trabas en forma de investigaciones del Congreso ni otras complicaciones.¹⁴¹

En las fases iniciales del programa GST, la administración Bush no encontró apenas obstrucción alguna a su actuación desde las filas del Congreso. Tanto demócratas como republicanos otorgaron una extraordinaria libertad a la administración para que esta procediera con su guerra secreta. Además, la Casa Blanca se negó en alguna que otra ocasión a proporcionar detalles de sus operaciones encubiertas a las comisiones de supervisión pertinentes del propio Congreso y este apenas protestó por las reticencias del ejecutivo en ese sentido.¹⁴² La administración también decidió unilateralmente reducir los miembros de la «Banda de los Ocho» del Congreso a solo cuatro: los presidentes y los miembros inmediatamente siguientes en el escalafón de los comités sobre servicios de inteligencia en la Cámara de Representantes y en el Senado.¹⁴³ Estos tienen prohibido comentar con nadie las sesiones informativas en las que se les pone al día de la actuación secreta del ejecutivo, lo que significa en la práctica que el Congreso carecía de capacidad de supervisión alguna sobre el programa GST. Y eso era exactamente lo que Cheney quería.

La administración Bush no creó el programa de «entregas extraordinarias» de la CIA. Este había comenzado ya en tiempos de Clinton, a

mediados de los años noventa, cuando el anterior presidente firmó una directiva presidencial autorizando a la CIA y a las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU., en conjunción con el FBI, a apresar a sospechosos de terrorismo en cualquier lugar del mundo sin necesidad de respetar acuerdos bilaterales de extradición ni convenciones internacionales.¹⁴⁴ La directiva de Clinton, además, permitía que esos agentes del Gobierno estadounidense enviaran a sospechosos de terrorismo a Egipto, donde, alejados de la protección de la ley y el «debido proceso legal» estadounidenses, podían ser interrogados por agentes de la *mujabarat* (la policía secreta egipcia) sin que las prohibiciones contra la tortura vigentes en Estados Unidos supusieran restricción alguna.¹⁴⁵ El programa exigía, eso sí, una autorización directa del presidente para cada operación de captura.¹⁴⁶ Durante los mandatos de Clinton, se efectuaron más de setenta entregas de ese tipo.¹⁴⁷ En algunos casos, se enviaban aviones estadounidenses a países extranjeros y, desde allí, se transportaba a los objetivos apresados de vuelta a Estados Unidos para ser juzgados en suelo norteamericano. Entre estas últimas «entregas» de perfil más prominente llevadas a cabo en tiempos de Clinton, podemos mencionar: la de Mir Aimal Kasi, un ciudadano paquistaní que había disparado y matado a dos empleados de la CIA fuera de las oficinas de la Agencia en 1993 y que fue transportado desde Pakistán en 1997;¹⁴⁸ la de Ramzi Yusef, cerebro del atentado con bomba de 1993 en el World Trade Center de Nueva York;¹⁴⁹ la de Wali Jan Amín Shah, quien había planeado la explosión de múltiples aviones de líneas regulares estadounidenses en un mismo día en 1995,¹⁵⁰ y la del miembro del Ejército Rojo Japonés Tsutomu Shiroasaki, quien había perpetrado un atentado con explosivos contra la embajada estadounidense en Yakarta en 1986 y que fue finalmente capturado y llevado a Estados Unidos en 1996.¹⁵¹ Todas esas entregas se hicieron a partir de órdenes de detención dictadas por jueces federales norteamericanos y culminaron en juicios ante tribunales civiles estadounidenses. Sin embargo, en aquellos casos en los que el Gobierno de Washington quería información de inteligencia antes que justicia, optaba por enviarlos a terceros países donde los retenidos carecían de derechos legales. En 1998, el Congreso estadounidense aprobó una ley en la que se declaraba «política oficial de Estados Unidos no expulsar, extraditar ni tampoco provocar el regreso involuntario de cualquier persona a ningún país del que se tengan motivos sustanciales para sospechar que la persona en cuestión se hallará en peligro de ser sometida a torturas, tanto si la susodicha persona está ya presente físicamente en Estados Unidos como si no».¹⁵² Las directivas presidenciales de Bush inmediatamente posteriores al 11-S dieron al traste con

esos reparos previos y la CIA intensificó su utilización de lo que los defensores de los derechos humanos darían en llamar los «taxis de la tortura».

Cuando el nuevo programa de asesinatos y capturas empezó a funcionar a pleno rendimiento, a finales de 2001, el número tres de la CIA en aquel entonces, Buzzy Krongard, declaró que quienes ganarían la «guerra contra el terror [serían] sobre todo, fuerzas que ustedes desconocen mediante acciones que ustedes no verán y con métodos que tal vez prefieran ignorar».¹⁵³ Un funcionario estadounidense directamente implicado en la entrega de cautivos comentó al *Washington Post* que «no los inflamamos a h...s. Los enviamos a otros países para que sean ellos quienes los inflen a h...s».¹⁵⁴ Otro funcionario encargado de supervisar la captura y el traslado de prisioneros explicó a ese mismo diario que, «si no se viola los derechos humanos de alguien en algún momento, probablemente no se consigue hacer bien el trabajo». Y añadió: «No creo que nos interese promover una actitud de tolerancia cero a este respecto. De hecho, ese fue el problema principal para la CIA durante mucho tiempo».¹⁵⁵ Coffey Black se expresó sin ambages en el Congreso a propósito de la nueva «flexibilidad operativa» empleada en la guerra contra el terrorismo: «Este es un terreno altamente clasificado, pero les diré que lo único que necesitan saber es que hubo un “antes” y un “después” del 11-S. Después del 11-S, nos hemos quitado los guantes».¹⁵⁶

Las fases tempranas del programa de entregas posterior al 11-S dieron inicio a lo que sería una batalla de varios años entre el FBI y la CIA a propósito de a quién le correspondía la iniciativa en la investigación de los atentados terroristas. También afloró entonces la escasa consideración que la Casa Blanca de Bush tenía por la posibilidad de procesar a los perpetradores del 11-S por la vía policial-judicial. Tras el derrumbe del régimen talibán y la llegada masiva de tropas estadounidenses a Afganistán, multitud de activistas de al-Qaeda se retiraron al otro lado de la frontera de ese país con Pakistán. En noviembre, fuerzas paquistaníes detuvieron al instructor de al-Qaeda Ibn al-Sheij al-Libi,¹⁵⁷ supuesto director del campo de entrenamiento de Jalden en Afganistán, donde fueron entrenados Richard Reid (el «Terrorista del Zapato») y Zacarías Musaui (el llamado «vigésimo secuestrador»)¹⁵⁸ Los paquistaníes entregaron a Libi a agentes del FBI destacados en la base aérea de Bagram para que estos lo interrogaran. Para el FBI, aquel prisionero era una fuente potencialmente valiosa de información de inteligencia sobre al-Qaeda y un posible testigo en la causa contra Musaui. El agente del FBI de Nueva York Jack Cloonan ordenó a sus agentes en Afganistán que «llev[ara]n esto como si lo estuvieran haciendo aquí mismo, en mi despacho de Nueva York».¹⁵⁹ Concre-

tamente, comentó: «Recuerdo haber hablado por una línea segura con ellos. Les dije: “Háganse un favor a ustedes mismos y léanle a ese tipo sus derechos. Puede que esté ya pasado de moda, pero todo esto se sabrá si no lo hacemos. Tal vez no sea hasta dentro de diez años, pero si no lo hacen así, terminará perjudicándolos a ustedes y a la reputación de la Oficina. Hagan que destaque como un ejemplo reluciente de lo que entendemos que es lo correcto”». Los interrogadores de Libi describieron la actitud de este como cooperativa y «verdaderamente amistosa», y dijeron que había accedido a darles información sobre Reid a cambio de una promesa de protección para su propia familia.¹⁶⁰

Sin embargo, cuando el FBI creía que estaba haciendo progresos con Libi, varios agentes de la CIA —siguiendo órdenes directas de Cofer Black— se presentaron en Bagram y reclamaron al detenido para ponerlo bajo su custodia.¹⁶¹ Los agentes del FBI se quejaron de que la CIA se llevase a su detenido, pero la Casa Blanca no admitió sus objeciones.¹⁶² «Ya sabes adónde vas —le dijo uno de los agentes de la CIA a Libi cuando se lo arrebató al FBI—. Pero antes de que llegues allí, voy a encontrar a tu madre y me la voy a follar.»¹⁶³

La CIA trasladó en avión a Libi hasta el USS Bataan, estacionado en el mar Árabe,¹⁶⁴ en el que también estaba retenido el llamado «talibán estadounidense», John Walker Lindh, que había sido capturado en Afganistán, junto a otros combatientes extranjeros. Desde allí, Libi sería transferido a Egipto, donde fue torturado por agentes de ese país. El interrogatorio de Libi estuvo centrado en un objetivo que se convertiría en elemento central del programa de entregas y torturas: demostrar la conexión de Irak con el 11-S.¹⁶⁵ Una vez se halló bajo custodia de la CIA, los interrogadores avasallaron a Libi con preguntas dirigidas a ligar los atentados y al-Qaeda con Irak. Incluso después de que los interrogadores que se encargaban de dar palizas a Libi informaran de que ya lo habían doblegado y de que su actitud había pasado a ser dócil y «obediente», desde la propia vicepresidencia del país (la oficina de Cheney) se intervino directamente y se ordenó que continuaran sometiendo al prisionero a técnicas de interrogatorio «mejoradas».¹⁶⁶ «Tras un auténtico interrogatorio brutal (me refiero a técnicas de interrogatorio mejoradas, pero a lo bestia), terminó admitiendo que al-Qaeda y Sadam mantenían una colaboración. Admitió que al-Qaeda y Sadam colaboraban en materia de ADM», explicó el ex interrogador veterano del FBI Ali Soufan al programa *Frontline* de la PBS.¹⁶⁷ Aun así, la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) expresó serias dudas entonces acerca de las confesiones de Libi. En un informe de inteligencia clasificado, señaló que el interrogado «no ha[bía]

referido detalles concretos» sobre la supuesta implicación iraquí y que «lo más probable es que este individuo esté confundiendo intencionadamente» a sus interrogadores.¹⁶⁸ Tras señalar que el sospechoso había sido «sometido a interrogatorios durante semanas», los analistas de la DIA llegaron a la conclusión de que Libi posiblemente había «descrito situaciones a sus interrogadores que él había podido deducir que atraerían su interés». Pese a semejantes dudas, la «confesión» de Libi sería entregada posteriormente al secretario de Estado Powell para que la utilizara como prueba al presentar el fraudulento argumento de la administración estadounidense a favor de la guerra en Irak ante las Naciones Unidas.¹⁶⁹ En aquel discurso, Powell llegaría a decir lo siguiente: «Puedo referirles la confesión de un destacado miembro de la red terrorista sobre cómo Irak proporcionó a al-Qaeda formación sobre el uso de esas armas».¹⁷⁰ Más adelante, cuando esas alegaciones se demostraron falsas, Libi —según Soufan— admitió haber mentido. «Les di lo que querían oír —confesó—. Quería poner fin a la tortura. Les hubiera dado cualquier cosa que hubieran querido oír.»¹⁷¹

Desde el primer momento de funcionamiento del programa de entregas e interrogatorios, comenzó a apreciarse un patrón centrado en dos objetivos fundamentales: el desmantelamiento de la red de al-Qaeda (y la prevención de futuros atentados) y la búsqueda de pruebas que justificaran una invasión de Irak. Para conseguir tales objetivos, no se iba a renunciar a ninguna opción ni táctica. Mientras el Departamento de Estado trataba de prevenir a la administración Bush contra la posibilidad de declarar una guerra global mal concebida, y presionaba para que se diera una respuesta estrictamente policial y judicial a los ataques del 11-S, Cheney se había puesto manos a la obra en la elaboración de un ambicioso plan de operaciones de secuestro y asesinato a escala global, en las que la iniciativa correspondería en un primer momento a ciertos elementos de la CIA. Cheney, según algunos ex altos cargos de la CIA y del Departamento de Estado, comenzó a dirigir lo que, en la práctica, constituía una persecución a escala mundial utilizando para ello una red de fuerzas de operaciones especiales y de agentes de la División de Actividades Especiales de la CIA (el brazo paramilitar de la Agencia).¹⁷² Estos ex altos cargos han explicado posteriormente que aquellas operaciones estaban imbuidas de una cultura muy particular y que ni los embajadores estadounidenses, ni los mandos de las fuerzas armadas convencionales de Estados Unidos, ni (tan siquiera) los jefes de delegación de la CIA en los países pertinentes, eran informados de las actividades clandestinas o encubiertas que se realizaban en su ámbito territorial de autoridad. Para la ejecución de ese

programa, Cheney aprovechó esa zona gris presente en la ley y la cadena de mando estadounidenses entre la jurisdicción de la CIA y la de las fuerzas armadas convencionales.

En noviembre de 2001, Cheney convocó una reunión en la Casa Blanca para dar los retoques finales a un decreto presidencial, redactado por Addington y otros abogados, que establecía las líneas generales de cómo serían juzgados los prisioneros capturados a lo largo y ancho del mundo.¹⁷³ Como ya era costumbre, a la reunión fueron invitados los abogados del Consejo de Guerra, pero no los altos cargos del Departamento de Estado ni del Consejo de Seguridad Nacional. Powell y los letrados del Departamento de Estado habían informado al presidente Bush de que, en su opinión, la Convención de Ginebra garantizaba a los talibanes y los activistas de al-Qaeda detenidos protecciones legales y un trato humano mientras estuvieran bajo custodia norteamericana.¹⁷⁴ Advertieron, además, de que no ofrecer tales protecciones a los enemigos de Estados Unidos pondría en peligro las vidas de los militares estadounidenses capturados durante la guerra.¹⁷⁵ El 7 de febrero de 2002, el presidente Bush tomó una decisión. Firmó otra directiva distinta, basada en la idea de que la Convención de Ginebra era «particular» y no resultaba aplicable a los prisioneros talibanes o de al-Qaeda retenidos por Estados Unidos. El mencionado decreto fue emitido justo después de que la administración Bush iniciara el envío de detenidos raptados en Afganistán y otros países hacia una prisión militar estadounidense ubicada en la bahía de Guantánamo, en Cuba.¹⁷⁶

Aunque el Congreso había desatendido sus responsabilidades como órgano supervisor en aquellos primeros momentos de la guerra contra el terrorismo, la administración sabía que esa situación no podía durar. Ya a comienzos de 2002, empezaron a oírse voces en el Capitolio exigiendo que tanto la CIA como el ejecutivo en general los informasen del alcance de las tácticas que estaba empleando la Agencia en su búsqueda y captura de sospechosos de terrorismo. Es probable que jamás lleguemos a conocer los detalles completos de cómo se llevaron a cabo aquellas operaciones iniciales del «Programa Cheney» aplicado tras el 11-S, ni quiénes fueron exactamente los que las llevaron a cabo. «Mantuvimos todo lo reducido que pudimos el círculo de personas que conocían la localización de los sitios negros. No se lo contamos al FBI —recordaba Rodríguez, el alto cargo de la CIA que coordinó la construcción y la utilización de esos sitios negros—. Muchas personas, incluidas algunas de la propia Agencia que gozaban de autorizaciones de seguridad del máximo nivel, no tuvieron información alguna al respecto. Que yo sepa, los detalles de la ubicación

precisa de los sitios negros no se compartieron ni siquiera con el presidente.» Rodríguez añadió que no se trataba de que aquellos altos cargos no incluidos en el círculo de personas informadas sobre el programa no fuesen gente digna de toda la confianza, «sino simplemente de que no tenían “necesidad” alguna de saberlo».¹⁷⁷

Las estrategias que alimentaron el ascenso de esa fuerza se convertirían en un modelo para un programa secreto que Rumsfeld terminó construyendo en el Pentágono. Rumsfeld se había limitado a mirar mientras la CIA se erigía en el «macho alfa» de la GGCT bajo la dirección de Cheney, pero estaba decidido a romper con lo que él mismo llamó la «dependencia casi total» del Pentágono con respecto a la CIA y a levantar un telón de acero en torno a las actividades más delicadas y potencialmente conflictivas de la élite suprema de los guerreros estadounidenses.¹⁷⁸ El proyecto fue ideado como una operación de inteligencia paralela a la CIA, pero también como la máquina de asesinato y/o captura más eficaz jamás vista en el mundo: una maquinaria que, por su propia naturaleza, no respondería ante nadie más que el presidente y su círculo de allegados más próximos.